INFORME SOBRE LA LIBERTAD RELIGIOSA INTERNACIONAL EN CUBA 2013

Resumen ejecutivo

La Constitución protege la libertad religiosa, aunque las políticas y prácticas del gobierno imponen restricciones a esa libertad. El gobierno vigiló a los grupos religiosos, y el Partido Comunista de Cuba, por conducto de su Oficina de Asuntos Religiosos, continuó ejerciendo control sobre la mayoría de los aspectos de la vida religiosa. El gobierno acosó a las autoridades religiosas que se expresaban sin reservas, impidió que los activistas de derechos humanos asistieran a los oficios religiosos y, en algunos casos, recurrió a la violencia para impedir que los activistas participaran en protestas políticas públicas al salir de los oficios religiosos. Sin embargo, los grupos religiosos establecidos, en su mayoría, informaron que sus miembros tenían más posibilidades de reunirse, participar en actividades religiosas, viajar al extranjero, conseguir nuevos miembros y realizar proyectos de beneficencia, educación y servicio comunitario. También informaron que había menos restricciones a la expresión religiosa y a la importación de materiales religiosos.

No se notificaron casos de abuso ni discriminación sociales por motivos de afiliación, creencias ni prácticas religiosas.

El Gobierno de los Estados Unidos alentó el fortalecimiento de las instituciones religiosas. Las visitas de intercambio siguieron siendo importantes para que los integrantes de las instituciones religiosas de los Estados Unidos se relacionaran con sus homólogos cubanos y para apoyar su derecho a profesar su religión libremente. La Sección de Intereses de los Estados Unidos se mantuvo en estrecho contacto con grupos religiosos cubanos, así como con grupos religiosos estadounidenses que viajaron al país. En declaraciones públicas, el Departamento de Estado de los EE.UU. exhortó al gobierno a respetar las libertades fundamentales de sus ciudadanos, incluida la libertad de culto.

Sección I. Demografía religiosa

El Gobierno de los Estados Unidos calcula que la población total es de 11 millones de habitantes (cifras de julio de 2013). No hay una fuente autorizada independiente que informe sobre el tamaño ni la composición de los grupos religiosos. La Iglesia Católica Romana calcula que de 60 a 70 por ciento de la población es católica. Se calcula que la feligresía de las iglesias protestantes representa un 5 por ciento de la población. Los bautistas y los pentecostales posiblemente constituyan las denominaciones protestantes más numerosas; las Asambleas de Dios informan un número aproximado de 110.000 miembros; las cuatro Convenciones Bautistas calculan una feligresía conjunta de más de 100.000 miembros. Los Testigos de Jehová

CUBA

informaron que tenían cerca de 96.000 miembros; los metodistas, unos 36.000; los Adventistas del Séptimo Día, 35.000; los anglicanos, 22.500; los presbiterianos, 15.500; los cuáqueros, 300; y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (mormones), 50. La comunidad judía calculó que tenía unos 1.500 miembros, de los cuales 1.200 residen en La Habana. Según la Liga Islámica, hay de 2.000 a 3.000 musulmanes residentes en el país, de los cuales se calcula que unos 1.000 son cubanos. También hay otros grupos religiosos como las iglesias ortodoxas griega y rusa, y los budistas y bahaíes.

Muchas personas, particularmente de la comunidad afrocubana, consultan a profesantes de religiones que tienen raíces en África occidental y la cuenca del río Congo, conocidas como Santería. Estas prácticas religiosas suelen entremezclarse con el Catolicismo y algunas de ellas incluso exigen el bautismo católico para su plena iniciación, por lo cual es difícil calcular con precisión la feligresía total de estos grupos sincretistas.

Sección II. Situación del respeto del gobierno a la libertad de culto

Marco jurídico y normativo

La Constitución protege la libertad de culto, aunque las políticas gubernamentales la restringen. La Constitución declara que el país es un estado laico y dispone la separación de la Iglesia y el Estado. El gobierno no favorece oficialmente ninguna religión ni iglesia en particular. Al Partido Comunista de Cuba se le ha delegado la autoridad de reglamentar las instituciones religiosas y la profesión de la religión por conducto de su Oficina de Asuntos Religiosos. Esta última controla y regula casi todos los aspectos de la vida religiosa, incluso la aprobación o denegación de las visitas religiosas; la construcción, reparación o compra de edificaciones religiosas; la compra y operación de vehículos automotores; la capacidad de celebrar oficios religiosos en público; y la importación de publicaciones religiosas.

La ley exige que los grupos religiosos soliciten reconocimiento oficial al Ministerio de Justicia. El procedimiento de solicitud requiere que los grupos religiosos indiquen el lugar de sus actividades y su fuente de financiamiento. El ministerio debe certificar que el grupo no duplica las actividades de otro grupo reconocido; de ser así, se deniega el reconocimiento. Una vez que el ministerio concede el reconocimiento oficial, el grupo religioso debe solicitar permiso a la Oficina de Asuntos Religiosos para realizar actividades; por ejemplo, celebrar reuniones en lugares aprobados, recibir a visitantes extranjeros, importar publicaciones religiosas, comprar y operar vehículos automotores, y construir, reparar o comprar iglesias y templos.

El servicio militar es obligatorio para todos los hombres. No hay excepción legal para los objetores de conciencia. La sanción por no cumplir con el servicio militar es encarcelamiento de tres meses a un año.

CUBA

Prácticas gubernamentales

El gobierno impidió que algunos activistas de derechos humanos asistieran a oficios religiosos. La policía solía tomar medidas, que incluían detenciones, para impedir que los miembros del grupo de protesta pacífica de las Damas de Blanco asistieran a la Misa católica. Esta práctica fue particularmente pronunciada en las provincias de Matanzas, Holguín, Villa Clara y Santiago. Asimismo, las autoridades hostigaban a las Damas de Blanco, a veces violentamente, a la salida de los oficios religiosos para impedirles que participaran en protestas pacíficas. El 14 de julio, los miembros de una multitud organizada por el gobierno empujaron y golpearon a Sonia Álvarez Campillo, una de las Damas de Blanco, y le fracturaron la muñeca, cuando salía de Misa en la provincia de Matanzas.

El gobierno tomó medidas para limitar el apoyo a figuras religiosas que se expresaban sin reservas. Las autoridades finalmente permitieron al Pastor Omar Gude Pérez (también conocido como Omar Pérez Ruiz), líder del Movimiento de Reforma Apostólica, asociación de iglesias independientes sin denominación, salir del país el 31 de enero después de que él protestara públicamente porque el gobierno se había negado a permitirle que trabajara como pastor o a expedirle una visa de salida. A Gude y a su familia se les concedió asilo en los Estados Unidos en 2011, pero no pudieron salir del país porque el gobierno no le expidió al pastor una visa de salida. El pastor dijo que estuvo encarcelado casi tres años por cargos falsos. Agregó que fue objeto de castigo en represalia por sus sermones francos y por denunciar repetidamente violaciones de la libertad de culto experimentadas por las iglesias del Movimiento de Reforma Apostólica.

Antes de su partida, Gude Pérez tomó medidas para transferir el título de propiedad de su residencia a Yiorvis Bravo Denis, otro pastor en la comunidad de Reforma Apostólica. Sin embargo, en septiembre el tribunal provincial de Camagüey determinó que la transferencia no era válida. El 5 de octubre, el gobierno trató de desalojar a Bravo y a su familia. La policía acordonó la residencia, y el gobierno organizó a una multitud para que rodeara la residencia y cantara consignas a favor del gobierno durante cuatro días. Bravo declaró que él y su familia fueron objeto de desalojo porque en la residencia estaban celebrando reuniones de carácter religioso, incluso clases de estudio bíblico.

Varios grupos religiosos, como los Testigos de Jehová y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, siguieron a la espera de una decisión del Ministerio de Justicia sobre sus solicitudes pendientes de reconocimiento oficial, que se ha prolongado por varios años. Estos grupos informaron que las autoridades les permitían realizar actividades religiosas, celebrar reuniones, recibir a visitantes extranjeros, hacer leves renovaciones a sus edificaciones y enviar representantes al exterior, pero que sus miembros eran objeto de hostigamiento por parte de la

CUBA

seguridad estatal, incluso de vigilancia generalizada de sus movimientos, llamadas telefónicas, visitantes y reuniones religiosas.

Algunos grupos religiosos, principalmente iglesias evangélicas protestantes e independientes, informaron que las autoridades públicas hostigaron y multaron a los feligreses por congregarse para rezar. El 12 de noviembre, la televisión nacional transmitió un programa en el que se tildó de “organizaciones subversivas” a las iglesias evangélicas. Los panelistas del programa declararon que las iglesias evangélicas despertaban interés en los jóvenes y las familias, eran dirigidas por pastores dinámicos y tenían éxito en la atracción de nuevos miembros. El programa llegó a la conclusión de que las iglesias evangélicas eran “parte de un gran plan del Gobierno de los Estados Unidos para socavar al gobierno cubano”.

Otros grupos evangélicos informaron que, a veces, los pastores fueron arrestados o detenidos por tratar de predicar en público. El 1° de junio, la policía detuvo a ocho líderes eclesiásticos de Pastores por el Cambio, que es una asociación de iglesias evangélicas independientes, durante seis horas después de hacer proselitismo en un mercado agrícola al aire libre en Bayamo, provincia de Granma. Los policías dijeron a los líderes eclesiásticos que si los miembros de la iglesia continuaban evangelizando en público, serían encarcelados de nuevo. Los funcionarios eclesiásticos dijeron que hasta el mes de junio pudieron predicar regularmente en el mercado sin ningún incidente. Tras las detenciones de junio, los miembros de Pastores por el Cambio siguieron con el proselitismo en público cada fin de semana. Los policías los detuvieron de vez en cuando por varias horas y les impusieron multas.

La Oficina de Asuntos Religiosos raras veces autorizó a los grupos religiosos para construir nuevas edificaciones o adquirir nuevas propiedades. Sin embargo, los dirigentes religiosos afirmaron que la oficina frecuentemente concedía permisos para reparar o restaurar las edificaciones existentes, lo cual permitió realizar importantes obras de ampliación de algunas estructuras y, en ciertos casos, construir edificaciones prácticamente nuevas sobre los cimientos de las antiguas. Los grupos religiosos informaron que durante el año hubo más posibilidades de obtener este permiso, aunque seguía siendo difícil obtener permiso para comprar o construir nuevas edificaciones.

En respuesta a estrictas restricciones a la construcción de nuevas edificaciones, muchos grupos religiosos emplearon residencias particulares, conocidas como “casas templo”, para los oficios religiosos. Los cálculos del número total de “casas templo” variaron considerablemente de un poco menos de 2.000 hasta 10.000. La Oficina de Asuntos Religiosos permitió que las casas se utilizaran para ese fin, pero exigió que los grupos reconocidos consiguieran aprobación para cada lugar propuesto mediante un trámite de inscripción separado. Los grupos religiosos indicaron que si bien las autoridades aprobaban muchas solicitudes en el lapso de dos a tres años a partir de la fecha de solicitud, otras solicitudes no recibían ninguna respuesta o se denegaban. Algunos

CUBA

grupos religiosos solo pudieron inscribir un pequeño porcentaje de “casas templo”. En la práctica, la mayoría de las “casas templo” sin inscripción funcionaron con poca o sin ninguna intervención por parte del gobierno.

La Oficina de Asuntos Religiosos siguió exigiendo una licencia para importar publicaciones y otros materiales religiosos. El gobierno es propietario de casi todo el equipo y todos los suministros de impresión y regula estrictamente los materiales impresos, incluso las publicaciones religiosas. La Iglesia Católica y algunos otros grupos religiosos pudieron imprimir periódicos y otra información y manejar sus propios sitios web con poca o sin ninguna censura oficial. La Iglesia Católica siguió publicando periódicos que a veces criticaban las políticas socioeconómicas oficiales y pudo transmitir de nuevo mensajes de Navidad y de Pascua en las estaciones radiales del Estado. La Oficina de Asuntos Religiosos siguió autorizando al Consejo de Iglesias de Cuba, organización general que agrupa a las denominaciones protestantes y goza de reconocimiento oficial, para que realizara una transmisión radial mensual de 20 minutos de duración.

Aunque el gobierno amplió el acceso a la internet de forma incremental durante el año, los líderes religiosos informaron que debido a que el acceso al correo electrónico y a la internet es continuamente limitado, tuvieron menos oportunidades de conectarse con colegas y homólogos en el extranjero y dentro de Cuba.

Con la excepción de dos seminarios católicos y varios centros de formación interreligiosa, el gobierno no permitió que los grupos religiosos establecieran escuelas acreditadas. Algunos grupos religiosos realizaron programas extracurriculares, retiros de fin de semana y talleres para alumnos de primaria y secundaria, así como programas de educación superior. La Iglesia Católica ofreció asignaturas para un programa de licenciatura y maestría, y varias comunidades protestantes ofrecieron, mediante el aprendizaje a distancia, diplomas de licenciatura y maestría sobre teología y temas afines. Estos programas funcionaron sin intervención, a pesar de que el gobierno no los permitía ni acreditaba expresamente.

Los dirigentes de los Testigos de Jehová instaron a sus feligreses a evitar la educación universitaria en Cuba porque, según su determinación, los requisitos para el ingreso universitario y el curso de estudio eran incompatibles con las creencias del grupo que prohibían la participación política. Los Testigos de Jehová también expresaron que para ellos era incompatible la expectativa de que los alumnos participaran en actividades políticas en pro del gobierno y el requisito de que estuvieran disponibles para desempeñar deberes asignados por el gobierno durante tres años después de la graduación. Al evitar las instituciones universitarias y las actividades políticas correspondientes, los Testigos de Jehová no podían aspirar a carreras profesionales; por lo tanto, su participación en la fuerza laboral se limitaba a los oficios técnicos y la labor manual.

CUBA

Los grupos religiosos siguieron informando que pudieron participar en programas de servicio comunitario, incluso prestación de asistencia a los ancianos, tutoría extracurricular para los niños, suministro de agua potable y dispensarios de salud. Algunas entidades confesionales de beneficencia de carácter internacional como Cáritas y el Ejército de Salvación mantuvieron oficinas locales en La Habana. Los grupos religiosos siguieron prestando asistencia humanitaria a las familias afectadas por el huracán Sandy, que azotó a la región oriental de Cuba en 2012. Sin embargo, algunas organizaciones informaron que no se les permitió distribuir la ayuda directamente a las familias necesitadas y que se habían visto obligadas a entregársela a los funcionarios públicos para su distribución.

La mayoría de los líderes religiosos informaron que ejercían la autocensura en los temas que predicaban y abordaban durante los oficios. Muchos temían que la crítica directa o indirecta del gobierno pudiera dar lugar a represalias por parte de este, tales como la denegación de permisos por parte de la Oficina de Asuntos Religiosos u otras medidas que pudieran limitar el crecimiento de sus grupos religiosos.

A pesar del requisito legal de prestar servicio militar, el gobierno siguió una práctica extraoficial de permitir un período de servicio público civil para sustituir el servicio militar en el caso de quienes tenían objeciones por motivos religiosos. Los dirigentes de los Testigos de Jehová y los Adventistas del Séptimo Día declararon que, por lo general, a sus feligreses se les permitía participar en el servicio social en vez del servicio militar.

Tanto la Iglesia Católica como el Consejo de Iglesias de Cuba informaron que podían celebrar oficios religiosos en las cárceles y los centros de detención en la mayoría de las provincias. Sin embargo, hubo algunos informes de que las autoridades penitenciarias no informaban a los presos de su derecho a asistencia religiosa, tardaban varios meses en responder a esas solicitudes y limitaban las visitas a un máximo de dos o tres al año.

Mejoras y avances positivos del respeto de la libertad de culto

El 14 de enero, el gobierno flexibilizó las restricciones sobre migración y viajes temporales al extranjero para los ciudadanos cubanos al eliminar los permisos de salida previamente requeridos. Los grupos religiosos informaron que este cambio permitió a sus líderes viajar con más libertad e hizo que aumentaran los intercambios bidireccionales entre las comunidades religiosas locales y el resto del mundo. La mayoría de los grupos religiosos también informó sobre una continua mejora de su capacidad de atraer a nuevos feligreses sin la intervención del gobierno, una menor intervención del gobierno en la celebración de sus oficios y más mejoras con respecto a su capacidad de importar materiales religiosos, recibir donaciones del extranjero, traer a trabajadores religiosos y visitantes extranjeros, restaurar templos y dirigir actividades

CUBA

educativas. Las organizaciones religiosas también informaron que el gobierno devolvió varias propiedades que el Estado había confiscado a la Iglesia en 1961.

Sección III. Situación del respeto de la sociedad a la libertad de culto

No se notificaron casos de abuso ni discriminación sociales por motivos de afiliación, creencias ni prácticas religiosas.

Sección IV. La política del Gobierno de los Estados Unidos

Los funcionarios de la Sección de Intereses de los Estados Unidos, entre ellos, el jefe de misión, se reunieron periódicamente con representantes de grupos religiosos. La tolerancia religiosa en una sociedad comunista y la libertad de culto fueron temas de discusión frecuentes. Los representantes de la Sección de Intereses de los Estados Unidos observaron las actividades religiosas y proporcionaron recursos para apoyar la labor de algunas organizaciones religiosas que asistían a sus comunidades. En declaraciones públicas, el Departamento de Estado de los Estados Unidos exhortó con regularidad al gobierno para que respetara las libertades fundamentales de sus ciudadanos, incluida la libertad de culto, y señaló las inquietudes manifestadas porque a los miembros pacíficos de la oposición política se les impedía asistir a oficios religiosos.

Los funcionarios de la Sección de Intereses de los Estados Unidos se reunieron frecuentemente con ciudadanos estadounidenses que visitaban el país como parte de intercambios religiosos y programas de ayuda humanitaria. Los representantes religiosos estadounidenses participaron directamente con instituciones religiosas cubanas y promovieron la tolerancia religiosa mediante sus actividades y su presencia en las comunidades cubanas. El Gobierno de los EE.UU. alentó estos programas.